

Estado y sociedad en el neoliberalismo dependiente¹

SERGIO ZERMEÑO²

El hecho de que nosotros hayamos decidido confiar nuestra vida y libertad, tanto en los trayectos de ida y venida como en la estadía en el lugar del diálogo, a las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES es porque hemos visto en ellas el futuro al que aspiramos. Un futuro en el que la sociedad civil con su fuerza de justicia verdadera haga innecesarias no sólo las guerras sino también los ejércitos, y un futuro en el que los gobiernos, cualesquiera que sea su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y severa de *una sociedad civil libre y democrática*.

Carta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a las ONGs, 20 de febrero de 1994.

I

LO QUE DICE ESTE EPÍGRAFE ha sido repetido en muchos otros comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y hay que tomarlo con seriedad. Tenemos que evaluar con todo cuidado las verdaderas potencialidades de esa sociedad civil en que los zapatistas ven una esperanza de redención para los mexicanos y para la democracia en México, comenzando por

¹ Ponencia presentada en la conferencia: "Social Change in Latin America: Toward the Year 2000", University of Maryland, 8-9 de abril de 1994.

² Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

los grupos indígenas que se sienten al borde del aniquilamiento por su marginación, por su pobreza extrema, por su declarada inutilidad frente a la globalización y el TLC, y que han preferido la muerte violenta antes que la inanición. Todo esto nos exige reflexionar, porque mientras ellos ven en nosotros, ciudadanos organizados de la sociedad civil, una esperanza futura, nosotros vemos en el levantamiento chiapaneco también una esperanza de cambio, de relajamiento de la dominación estatal, de participación de la sociedad civil. ¡Qué paradoja!

En este seminario se nos propone razonar sobre los mecanismos que han permitido que regímenes autoritarios hayan podido ser sustituidos por formas más democráticas, al menos en lo que respecta a los mecanismos formales de la representación, en un período de reajuste económico caracterizado por una creciente desigualdad social; ¿cómo se mantiene un orden basado en una *democracia política* cuando la creciente desigualdad nos aleja de la *democracia social*? Pretendemos indagar sobre lo que ha pasado y pasará con la relación Estado-sociedad en los últimos treinta años del milenio y se nos sugiere privilegiar la perspectiva “desde abajo” de esta relación: las transformaciones desde lo social. ¿Qué ha sucedido con los movimientos sociales? En esa medida nos parece que la apreciación del zapatismo constituye un buen punto de partida. Comencemos entonces preguntándonos por la sociedad civil mexicana con una perspectiva un poco más amplia, por ejemplo a partir del 68 que es el evento que estábamos conmemorando cuando nos despertaron los insurrectos (ofrecemos disculpas por un acercamiento al caso mexicano demasiado particularista en el apartado II sobre las movilizaciones sociales, pero la perspectiva *from below* hace necesario este rodeo).

La siguiente idea puede guiarnos: los años que estuvieron alrededor del 68, los sesenta y los setenta, nos presentaron un panorama sociopolítico en el que los actores de nuestra modernidad vivieron su mayor embarcamiento, o digamos, su menor debilidad. En efecto, situándonos al margen de la moda posmoderna, nos parece pertinente afirmar que en esos dos decenios México vio surgir los movimientos obreros de mayor autonomía, las protestas con más consistencia venidas de las clases medias (el 68 en su centro), y las mayores afrentas al vértice estatal desde los fortalecidos grupos burgueses nacionales y regionales.

Sin pretender hablar de causalidad, ni de “agudización de contradicciones”, lo cierto es que el movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuenta, con sus presos políticos (Vallejo) reivindicados por el 68, expresa la misma necesidad de autonomía que la Tendencia Democrática de los electricistas con Rafael Galván y que el vigoroso sindicalismo independiente de los setenta; de igual manera, el movimiento del magisterio con Otón Salazar reivindicaría la autonomía organizativa y política que caracterizaría al movimiento médico del 65, a los movimientos estudiantiles a lo largo de aquel decenio y al sindicalismo universitario de trabajadores y académicos que fuera la nota preponderante de los setenta; qué decir, en fin, de la toma de distancia antiestatal y la casi confrontación que el empresariado y la derecha escenificaron en contra del presidente Luis Echeverría

(1970-1976) a mediados de los setenta y que hicieron posible aquellos encabezados como: “Los empresarios frente al Estado” o incluso “Los empresarios en el Estado”.

Es cierto que en muchas ocasiones el discurso político-ideológico de estos movimientos ocultaba su manifestación más importante: el embarnecimiento de los actores colectivos *sociales*, la mayor densidad societal digamos, en un país cultural e históricamente estatal. En el 68 coexisten tensionadas dos orientaciones: la culturalista societal, alimentada por el mayo francés, la revuelta generacional, la liberación sexual y el antiburocratismo y antiautoritarismo de los movimientos juveniles de los países desarrollados, a través de la música y el cine, por un lado y, por otro, su manifestación más vertical, propiamente política, preocupada por la organización, las representaciones legítimas, las alianzas estratégicas con campesinos y obreros, la conformación del Consejo Nacional de Huelga (CNH) y sus comisiones en multiplicación, el politburó ante la inminencia de la represión y, en fin, todo aquello que “politizaba” al movimiento y que por momentos lo hacía aparecer tan piramidal como a su adversario (a ello cooperaba, sin duda, nuestra cultura estatal y el marxismo-leninismo que constituía, sobre todo en aquel momento, la corriente hegemónica en las carreras sociales y humanísticas universitarias).

Pues bien, lo que aquí afirmamos es que el fortalecimiento social que se vivió en aquellos dos decenios, nuestro mejor acercamiento a la modernidad, digamos, y del que el movimiento estudiantil fue la manifestación mejor lograda, sería totalmente modificado a lo largo de los años ochenta y noventa. Nuestra modernización salvaje, podría afirmarse, está acabando con nuestra endeble modernidad. Tenemos así un *México modernizador*, el *México trasnacional* llamémoslo; junto a él, un *México moderno* en desmantelamiento; más abajo de ellos en términos de ingreso y participación se extiende enorme un México que hemos llamado el *México roto* y que vamos a describir en este ensayo; y, tenemos en fin, nuestro *México profundo*, bien descrito por Bonfil, el México que se rebeló en Chiapas echando mano de sus raíces para enfrentar un futuro de mayor descomposición sabiendo que nada puede ofrecer al *México trasnacional*. Regresaremos sobre este esquema al final del ensayo. Ahora detengámonos en lo referente a nuestra modernidad y veamos cómo el 68 se desparramó sobre la sociedad mexicana fortaleciendo su independencia frente al Estado, aunque ya sin cabeza ni unidad.

II

Si dejamos de lado a la guerrilla de los setenta por haber sido cortada de tajo en los últimos años del echeverriísmo, como nos lo han recordado Montemayor y Aguilar Camín,³ dos fueron las derivaciones del movimiento estudiantil:

1) La mejor conocida y la que tuvo mayor visibilidad fue naturalmente la sindicalista. Desde el inicio de la campaña presidencial, Luis Echeverría entró en fricciones con el líder de la CTM, Fidel Velázquez, y ello abrió un espacio muy valioso para los sindicatos en busca de independencia frente a la pesada pirámide corporativa del cetemismo. Arrancaron seis años de fomento a la insurgencia sindical con hincapié en los lastimados centros de educación superior, con la UNAM al frente.⁴ Viene al caso recordar que la “forma” sindicalista de hacer política fue una modalidad impuesta desde lo alto, más que una elección de las dirigencias político-académicas surgidas del 68. En efecto, en el año 71 los presos políticos, al ser liberados, manifestaron su interés por crear organizaciones y partidos políticos. Ahí comenzó Heberto Castillo las primeras versiones del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y se fundó la organización revolucionaria Punto Crítico. Sin embargo por las razones descritas, y porque el monopolio de las representaciones no permitía en aquel entonces otorgar legitimidad ni siquiera al Partido Comunista Mexicano, los espacios que *a fortiori* tenían que abrirse a la participación de aquellos convulsionados actores sociales quedaron restringidos a los terrenos más básicos, más societales, del sindicalismo.

2) Pero esta efervescencia de la acción en lo social fue más auténtica en el segundo caudal en que desbordó la olla hirviente del 68: “ir al pueblo”, salir de las universidades para irse a vivir entre los pobres, oírlos, organizarse en torno a sus necesidades, construir el partido desde ahí, abrazando la “línea de masas” en la forma mostrada por el maoísmo. Aunque al principio unos plantearon ir a las zonas obreras y otros sobre todo al campo (“cercar a las ciudades”), fue sin embargo en las áreas urbanas, en las colonias populares de reciente asentamiento y en las invasiones de terrenos para vivienda, en donde encontraron una mejor respuesta.⁵ Desde el año 1969, la sección Ho Chi Minh en el medio obrero de la Ciudad de México, la Organización Regional Compañero y Política Popular decidieron posponer la formación partidista en favor de las organizaciones de masas en provincia. Fueron fundados entonces el Comité de Defensa Popular

³ Carlos Montemayor, *La guerra del paraíso*, México, Diana, 1992, y Héctor Aguilar Camín, *La guerra de Galio*, Ed. Cal y Arena, 1991.

⁴ Los trabajadores administrativos en el STEUNAM y los académicos en el SPAUNAM y, en lo que hace a provincia, destacaron las universidades de Guerrero, Puebla, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa.

⁵ A este respecto, consúltese Óscar Núñez, *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, UAM, 1990. Vivienne Bennett, “Orígenes del movimiento urbano-popular mexicano: pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas (1960-1980)”, *Revista Mexicana de Sociología*, 1993, núm. 3, IIS-UNAM. Josiane Boucher, “La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP)”, en S. Z. y Aurelio Cuevas, comps., *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 1990.

de Durango (CDP), la Unión Ejidal Valle de Banderas en Nayarit, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey con más de veinte colonias, el Frente Popular de Zacatecas, la Colonia Francisco Villa en la ciudad de Chihuahua —desde donde se organizó con electricistas y ferrocarrileros la defensa popular (CDP) en ese estado—, la Unión de Uniones en los recientes asentamientos campesinos y de indígenas desplazados en Chiapas, la Coalición de Ejidos en el Valle del Yaqui, en Sinaloa y Sonora, expropiados al final del sexenio echeverriísta, los ejidos de La Laguna y la zona industrial de Monclova en Coahuila, San Miguel Teotongo y la Unión de Colonias Populares en el Valle de México. Se trató de una efervescencia de lo social, de ir a las bases, lo que no estuvo exento de una sobreideologización y sobrepolitización: había las corrientes más “puras” que no despegaban su enfoque de los actores “pro-tagónicos” de la historia y de la esfera de la producción (el cerco a la ciudad desde el campo o, cuando eso resultó una utopía, el control obrero del corazón productivo bajo las directrices organizadas y centralizadas en una élite). A pesar de ello no predominó la Línea Proletaria (LP), sino la Línea de Masas (LM): una mayor descentralización con respecto a la estructura proletaria, la insistencia en que los movimientos basados en las colonias eran el corazón mismo de la “actividad revolucionaria” y no un complemento de ninguna esfera productiva.⁶ Así, la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, al dar primacía a las organizaciones populares y a lo local por sobre la actividad partidista, se mantuvo más cerca de su perfil maoísta original, a diferencia de OIR-LP, y encontró sus alianzas naturales en el movimiento urbano popular destacando su articulación con la Unión de Colonias Populares (UCP) de la capital y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Hacia finales de los setenta, sin embargo, con el auge electoral partidista generado por la Reforma Política de Reyes Heróles desde el 77, se planteó inevitablemente la necesidad de desplazarse desde los movimientos locales hacia la organización de un frente que pudiera articularse, con el tiempo, en la “forma” partido (no necesariamente electoral). La Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano Populares (CONAMUP) aparece en el centro de una nueva época en la que proliferan los Frentes, las Coaliciones, las Alianzas, las Coordinadoras...⁷ Una especie de nueva oleada hacia el centro y hacia arriba que va a verse reforzada por el terremoto del 85 en la capital y por el ascenso del fenómeno cardenista y su poderoso magnetismo hacia la acción político-partidaria. El movimiento urbano popular nucleado en la coordinadora nacional (CONAMUP) se disloca y prácticamente desaparece en esta espiral centralizadora de los ochenta, y el gran movimiento maoísta hacia lo social, del decenio anterior, se repliega en lo que fueron sus bastiones más importantes del norte del país. Al organizar posteriormente el Partido del Trabajo (PT) y

⁶ No olvidemos que la primera gran invasión para asentar colonias populares fue durante el movimiento del 68 y al margen de él, en los pedregales aledaños a la UNAM.

⁷ Coordinadoras (CONAMUP, CNTE, CNPA, COSINA...); los movimientos nacionales y regionales (MRP, MAUS, Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur del D. F.), las Centrales (CIOAC); las Asociaciones (ACG, ACNR...); las Uniones (UPREZ, ULR, UCEZ, UIC...); los Frentes (FNAP, FNCR, FNDSAC...), etcétera.

gerenciar los importantes fondos que Salinas —vía PRONASOL— les otorgaría con la condición de mantenerse deslindados del cardenismo, estos grupos intentarán defenderse, en alianza táctica, de lo que es característico de los últimos veinte años de nuestro siglo: el desmantelamiento de lo social, el vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los espacios organizativos y de identidad intermedios entre el individuo atomizado, sin identidad, y el liderazgo presidencial paternalista.

Tenemos pues una primera fuga hacia lo alto, producto natural de la Reforma Política y del lopezportillismo (1976-1982) que consideran que la “forma sindicato” de hacer política y la mezcla entre los universitarios y el pueblo genera una alteridad inconveniente mientras la “forma partido” (partidista-parlamentaria), sería mucho más acorde, mucho más moderna y, fundamentalmente, fomentaría una oposición más moderada al tensionar y confrontar acción social y acción política, movimiento social y protagonismo parlamentario, base y dirigencia.⁸ Durante todo el lopezportillismo y parte del sexenio delamadridista (1982-1988), en el nivel nacional y no sólo en las universidades, será muy fuerte la tensión entre participar en la política partidista legal o permanecer en la base de los movimientos. Veremos en muchos casos un reagrupamiento defensivo de los movimientos y de las luchas sociales en Coordinadoras, Uniones, Frentes, etcétera.

III

Pero el debilitamiento de las identidades colectivas y de las intermediaciones no responde sólo a un acto desde arriba, desde el autoritarismo estatal: a partir de entonces, el desmantelamiento de la sociedad será resentido sobre todo “desde lo bajo”: por la masificación demográfica que hacia el final de los setenta modificará de manera rotunda el panorama urbano y se enlazará dramáticamente con el

⁸ En la propia UNAM la historia de los setenta es nítida a este respecto: lleva el nombre de “soberonato” y recuerda en algo el enfriamiento de las sociedades sudamericanas desde las dictaduras: desmantelar la sobreparticipación dividiendo, primero, el sindicalismo académico del sindicalismo de los trabajadores administrativos (STEUNAM-AAPAUNAM); después, absorbiendo hacia la vida partidista nacional (PC, MAP, PMS, PRT) a una de las más lúcidas camadas de políticos-intelectuales, los hijos del 68, agrupados en el Consejo Sindical desde 1973; separando, en fin, el sindicalismo de la UNAM del de las otras universidades al poner en la ilegalidad al Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) como órgano centralizador. Por su parte, la SEP emprendió la delicada tarea de condicionar el presupuesto en cada una de las universidades del país a la clara separación entre la vida académica universitaria y el entorno social popular. Al Consejo Sindical de Profesores de Enseñanza Media y Superior pertenecieron: Manuel Peimbert, Luis de la Peña, Gerardo Estrada, Hugo Gutiérrez Vega, Cristina Puga, Eduardo Valle, Juan Brom, Rolando Cordera, Salvador Martínez della Rocca, Juan Felipe Leal, José Woldenberg, Eleazer Morales, Juan Garzón, Octavio Rodríguez Araujo, Sergio Colmenero, Juan Manuel Lozano, Octavio Navarro, Carlos Fernández del Real, Rafael Pérez Pascual, Jorge del Valle, Ignacio Osorio, Javier Centeno, Luis González de Alba, Arnaldo Córdoba, Luis Haza, Humberto Herrero, José Abarca, Rufino Perdomo, David Pantoja, Eduardo Rubio, Alfonso Vélez Pliego, Raúl Montalvo, Max Ortega, etcétera.

total estancamiento económico de los años ochenta, la debacle petrolera y el fin de los recursos públicos y de los “préstamos dulces”.

Como lo hemos establecido en otra parte,⁹ quedó poco de esa sociedad y de esos actores que durante los sesenta y los setenta podríamos calificar de relativamente embarcados, de manera que quienes tuvieron que actuar y hacer política en el nuevo panorama se encontraron con un entorno bastante desordenado, en vías de informalización y pauperización (durante los ochenta la caída del mínimo salarial fue del 40%, y el crecimiento de la economía informal alcanzó a la mitad de la mano de obra). Esto significó, en un país cuyo PNB había crecido al 6% en los últimos treinta años, una conmoción. Como lo han establecido algunos economistas latinoamericanos: América Latina creció, en el momento de su “despegue” (1950-1980), a una tasa del 5.5% mientras que Estados Unidos (1870-1906), lo hizo al 4.8%.¹⁰ Pero a diferencia del resto de la región, México no sólo no moderó la tendencia durante los setenta, sino que atizó la caldera del crecimiento en su flamante rol de país petrolero. Para una sociedad que prácticamente había cambiado a su población del campo a la ciudad en cuatro décadas, el efecto de todo este impulso contra el muro del estancamiento que significaron los años ochenta fue catastrófico. No nos parece exagerado ilustrar la “pedacería social” resultante con los datos de José Luis Calva cuando nos recuerda que la creación de empleos en el país fue de sólo 1.3 millones entre 1982 y 1990, contra 1.2 millones de jóvenes que se incorporaron cada año como demandantes de trabajo, lo que hasta ese momento había creado una reserva de 8 millones de personas que no fueron absorbidas por el mercado de trabajo, estimándose que un porcentaje cercano a la mitad estaría en los Estados Unidos en forma ilegal.¹¹

Sin embargo este gran desorden no es producto solamente del descontrol demográfico, del pasaje abrupto de lo tradicional campesino a lo moderno urbano y de la industrialización excluyente, de la crisis de estancamiento y de la marginación. Se explica también y cada vez más por nuestro proceso de integración transnacional, la caída abrupta de los aranceles y la “norteñización” de México a partir de la entrada en el GATT en 1986. Lo que fue difícil construcción de una burguesía nacional en expansión durante la etapa sustitutiva de importaciones y de crecimiento hacia adentro, se convirtió en lo contrario: concentración en menos de doscientas firmas transnacionales con una modernización vuelta hacia afuera: ser competitivo en el plano mundial en menos de un sexenio o morir (destrucción en consecuencia de lo que alguna vez se llamaron clases sociales nacionales). Pero olvidemos los grandes nombres de la etapa sustitutiva; lo que resulta más dramático en este enfoque es la destrucción del empresariado intermedio: 70 000 medianas y pequeñas empresas desaparecidas en menos de ocho años, una de cada dos que existían, sabiéndose incompetentes más de la mitad de

⁹ “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1989, y “La derrota de la sociedad”, *RMS*, núm. 2, 1993.

¹⁰ Víctor Tokman, “El imperativo de actuar. El sector informal hoy”, *Nueva Sociedad*, núm. 90, Caracas, 1987.

¹¹ José Luis Calva, *La Jornada*, 16 de nov., 1991.

las restantes.¹² De la consistencia del otro actor fundamental de la industria poco se puede decir: reducción cuantitativa de los obreros del centro del país, desaparición *de facto* y sin protestas del derecho de huelga, migración de la gran industria al norte incorporando a un proletariado más joven, menos escolarizado y sin tradición obrera ni organizativa y, en la maquila, crecimiento espectacular de 100 000 a un millón de obreros entre 1980 y el año 2000, cuando representarán el 33% de la población manufacturera (mujeres en 75%, en su gran mayoría entre 15 y 25 años de edad, con bajísimos índices de sindicalización, nulos derechos laborales, salarios cercanos al mínimo y gran inestabilidad en el empleo).¹³ Recordemos en fin que entre cinco y quince millones de campesinos podrían ser afectados en el próximo decenio según el fin de los subsidios y la entrada de granos básicos a precios muy reducidos (maíz y frijol fundamentalmente).¹⁴ Agroindustrialización y desaparición del ejido en el norte y, en el sur, migración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, comienzan a ser las características de la nueva etapa en el agro (los zapatistas han demostrado tener este escenario más claro que cualquier analista académico).

IV

Sin embargo, México no es un caso aislado en esta trayectoria de desordenamiento sociopolítico. Si nos volvemos rápidamente hacia el marco conceptual con que las ciencias sociales han analizado a América Latina en los últimos treinta años, veremos las coincidencias: una vez que la llamada teoría de la dependencia, con Cardoso y Faletto, puso en claro que nuestras economías se desarrollaban a pesar de su creciente articulación con la economía mundial, la preocupación central se desplazó de fuera (imperialismo, dependencia...), hacia el plano doméstico, y de la economía a lo social; entró entonces la euforia por caracterizar la estructura de clases: había la esperanza de que con el desarrollo se conformaran actores nacionales centrales, verdaderas clases en el sentido decimonónico europeo, y las ciencias sociales pasaron un buen rato tratando de responder a la pregunta sobre si lo que estaba en la periferia era o llegaría a ser de la misma materia que lo que se encontraba en el centro, y sobre el problema en torno a la potencialidad revolucionaria de los pobres urbanos. En el fondo, una especie de patente garantizaba, en el "imaginario conceptual" de los latinoamericanos, nuestra entrada inexorable en el reino de Occidente, algo así como un proceso de modernización irrefrenable. Nos lo recuerdan conceptos tan ordenadores de

¹² Enrique de la Garza, 1990, "Reconversión industrial y polarización del aparato productivo", en Garavito y Bolívar, *México en la década de los ochenta*, UAM-Azcapotzalco-El Cotidiano.

¹³ Bernardo González Arréchiga, y José Carlos Ramírez, 1990, "Definición y perspectivas de la región fronteriza", *Estudios Sociológicos*, núm. 7.

¹⁴ José Luis Calva, "Posibles efectos de un Acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos sobre el sector agropecuario mexicano", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.

la sociedad como lo fueron los de modo de producción, articulación de modos de producción, diacronía, sincronía, tránsito, clases fundamentales, clases subalternas, clases apoyo, gran industria, estructura, superestructura, dominancia, predominancia, etcétera.

Muy pronto se hizo evidente, sin embargo, que en las sociedades en tránsito, como se les llamaba, los agentes dinamizadores no eran los actores en el terreno de lo social (las clases, si se quiere), y vino la euforia por estudiar al Estado y a Gramsci. Si nos volvemos hacia esa otra gran corriente del análisis latinoamericano que se centró en los movimientos sociales, también se desdibujaron los actores y los escenarios: de la euforia por analizar el movimiento obrero derivamos hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la masa marginal, y de ahí nos interesamos por las manifestaciones defensivas que proliferaron durante las dictaduras militares y la crisis económica de los ochenta. Es decir, de la lucha de clases a los movimientos sociales, a las luchas históricas para rematar en el estudio de las “identidades restringidas” en movimientos urbanos, derechos humanos, comunidades eclesiales, sindicatos, juventud, mujeres...

Ante la fragmentación, la desarticulación y la heterogeneidad de los actores históricos, de las clases modernas y de las manifestaciones políticas en un escenario latinoamericano golpeado, al mismo tiempo, por las dictaduras y la gravedad de la crisis económica, las visiones de reclusión defensiva, identidad restringida y, en una palabra, las *visiones en torno a la comunidad*, son los ordenadores éticos y conceptuales con que los latinoamericanos comenzamos a pensar nuestra realidad en el pasaje de los setenta a los ochenta.

Sin embargo, avanzados los años ochenta, el asunto se vio despojado incluso de su dimensión humanista y solidaria para recrearse en un sombrío escenario desmedidamente negativo. A la imaginación en torno a la comunidad se le sustituye con conceptos que derivan de investigaciones más cercanas al medio marginal y que nos hablan de anomia, decadencia, “destructividad”, desintegración, caos, negatividad, antisocialidad, deterioro...

Si dejamos de lado la teorización en torno al “tránsito a la democracia” y su optimismo infundado, parece ser cierto que en América Latina están resultando más pertinentes, hoy, los conceptos inspirados por Durkheim, Tocqueville o Gramsci referentes a la disolución de la cohesión social, a la desintegración de identidades intermedias y a la particularización, o digamos, al repliegue en la esfera individual y atomizada de los miembros de una sociedad: hablar de los excluidos es hablar de la mayoría y, en esa medida, lo marginal ha regresado como un concepto de preocupación central. Deberemos hacer referencia, paradójicamente, a “la centralidad de los marginados”, siguiendo el consejo del peruano Matos Mar.

V

A lo anterior se agrega un fenómeno desarticulador muy característico de nuestro país, pero sobredimensionado en el presente. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada “transición a la democracia” aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que “puede ser larga”, aceptan al mismo tiempo que atravesarán por períodos de inestabilidad peligrosos para el modelo en su conjunto (Brasil, Venezuela...). En tales condiciones y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el “fin” buscado a toda costa, se justifica el *actuar preventivamente desalentando, o francamente desmantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas* y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la agilidad que el reordenamiento requiere. Ello ha empujado a redoblar lo que ha sido un rasgo histórico del autoritarismo mexicano: la destrucción de todo aquello que cobre alguna fuerza independiente del control desde el vértice estatal.

No obstante, en la medida en que la democracia se vuelve una exigencia de los organismos mundiales en la era de la globalización, el desmantelamiento desde lo alto se ha convertido en una finísima especialidad de destrucción de espacios e identidades colectivas sin el empleo manifiesto de la violencia, una habilidad para desmantelar la *democracia social* manteniendo una *democracia política* cada vez más encerrada en espacios restringidos, cupulares, cernidos por el fraude electoral: un juego partidista y parlamentario hiperpublicitado por los medios de comunicación, cuando así conviene, para recrear la imagen de que alguien vigila los intereses ciudadanos allá arriba.

Algunos ejemplos de esta ingeniería del desmantelamiento social serían: 1) *la ruptura del PAN*, debido a los costosísimos compromisos de fidelidad que el Estado le impuso como condición para reconocerle sus triunfos electorales. Se tuvo que mostrar tan cerca del salinismo la dirigencia panista y renunciar tan escandalosamente a una reforma del sistema electoral, que se ha debilitado uno de los raros organismos sociales de la vida política mexicana (imperó lo más negativo de lo mexicano: la entrega, en sacrificio, del poder social a cambio del poder para una dirigencia así amansada y sometida al *tlatoani*). 2) *la ingeniería electoral* para el fraude: montos económicos elevadísimos que no se comparan con los modestos presupuestos electorales que las democracias de Occidente tienen como objetivo, a) asegurar una mayoría parlamentaria a la élite gobernante permitiendo leyes expeditas y *ad hoc*, comenzando con la propia legislación electoral (los “ingenieros” pueden incluso, por mal cálculo, llegar al horrible espectáculo del monopolio político como en el 91); b) dedicar recursos masivos para levantar un censo político de alta precisión (credencialización y mapas electorales), con fines que van más allá de lo electoral inmediato y focalizan esencialmente a los puntos candentes que requieren de “bomberazos” PRONASOL o, en el extremo, de la acción más drástica de “seguridad” nacional; y, c) provocar el desaliento y el abs-

tencionismo cuando los ciudadanos corroboran que las opciones por el cambio y el voto opositor están negadas o se reducen sólo a la oposición “leal” del PAN, que por momentos aparece como aparato de Estado junto al PRI, al PRONASOL, al clero, a los partidos títere y a Televisa. 3) *El desmantelamiento de la universidad pública*, y en particular de las ciencias sociales, al abatirse los ingresos de la academia, enviando a los grandes maestros a la búsqueda de empleos suplementarios, prestigiando deliberadamente a los centros privados cuya planta académica ha sido casi en su totalidad formada en planteles y con subsidios públicos, separando institutos de escuelas y facultades, otorgando estímulos económicos y becas con base en la fidelidad institucional, enfrentando a todos contra todos, hasta a los más prestigiados maestros, por un ínfimo trozo de estímulos monetarios. Así, el presupuesto de las universidades, en otra hora autónomas, se desglosa hoy minuciosamente desde la Secretaría de Hacienda, y no existe ninguna forma de destinar fondos para relacionar horizontalmente (utopía de los setenta) sapiencia universitaria con necesidades populares o de grupos medios (el único horizontalismo que se permite a este respecto es entre los institutos de alta tecnología y la gran empresa). ¿Quién puede en estas condiciones crear una asociación para la defensa de los intereses de su gremio si no ha quedado ningún lugar intermedio, ni presupuestaria ni identitariamente..? 4) *El control de los medios de comunicación* de masas cuya propiedad puede privatizarse, pero el contenido de sus emisiones permanece bajo estricto control mediante la contratación de publicidad gubernamental, la intromisión en la elección de directivos, la política impositiva o el veto deliberado sobre periodistas, conductores de programas radiofónicos y televisivos, etcétera. Para quien se muestra dispuesto a prestigiar las políticas gubernamentales o descalificar a los que las critican, van ayudas directas en monetario, programas de televisión exclusivos, propaganda de todas las instituciones federales y estatales, contratos millonarios para la producción de “obras” culturales. En el largo plazo quizá sólo ha podido escapar la revista *Proceso* y *La Jornada* con severas embestidas... 5) Finalmente el PRONASOL resulta lo más nítido para ejemplificar este vaciamiento de las intermediaciones al ligar en forma directa a la figura personalizada del presidente de la República con la diminuta y *transitoria* (sólo mientras dura la obra), asociación de ciudadanos paupérrimos allá, en lo más recóndito de la sociedad atomizada; o bien, cuando así conviene, al prestigiar a tal organización, por la que se canalizan los fondos, en detrimento de tal otra, indeseable, regularmente con más tradición, mejor asentada y con más autonomía con respecto a la estructura de control gubernamental; o bien, se le entrega un tractor a un miembro no tan justificado de un grupo que había solicitado cinco, lo que muy probablemente provocará la confrontación de ese agregado de campesinos. Se pensaba que PRONASOL eliminaba intermediarios corruptos que en otros momentos impedían que los dineros públicos llegaran a quienes estaban supuestamente dirigidos. Chiapas puso en entredicho esta creencia, quedando al descubierto que con el pretexto de eliminar intermediarios, lo que SOLIDARIDAD sí ha logrado con eficiencia es desmantelar las más auténticas organizaciones intermedias de la sociedad (de la

misma manera que la crítica a la corrupción de las cúpulas sindicales terminó siendo la crítica al sindicalismo y, de ahí, la crítica a cualquier corporativismo, es decir: asociacionismo intermedio). Esto forma parte de una misma concepción desmanteladora de las defensas sociales, de la consistencia del tejido social.

Así pues, entre lo social disperso y el Estado se encuentran muchas constelaciones que sufren este embate y ello se constituye en uno de los “disolventes” más poderosos, aunque no único, de lo social. En efecto, hoy podemos establecer la hipótesis de que ha habido en México, a partir de los años ochenta, un debilitamiento palpable de los órganos y espacios de mediación. Enumeremos: 1) En el *plano propiamente social* hoy podemos comprobar en México y también en América Latina la crisis generalizada de los movimientos y las luchas sociales, la destrucción de la acción sindical y la prohibición de las huelgas y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2) En el *plano organizativo social con cierta institucionalización* sucede lo mismo: hay una crisis de los frentes, coordinadoras, asambleas, sindicatos, confederaciones sindicales, obreras, agrarias, uniones de pueblos, colonias, órganos vecinales, comunidades eclesiales, etcétera; 3) En los *espacios institucionalizados de lo público* como el sistema escolar, universitario, de la cultura y en los medios de comunicación en general, también encontramos el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del eficientismo científico-técnico, y asistimos al desmantelamiento de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social como el sistema de salud, de abasto, de transporte, de vivienda... 4) Las *instituciones propiamente políticas* de la sociedad: partidos y organizaciones políticas, parlamento, asambleas de representantes, cúpulas sindicales, patronales, sectoriales, grupos de interés, de presión, de opinión... Creemos que la hipótesis sobre el debilitamiento de lo público y de la sociedad moderna puede ser sustentada en todos estos terrenos.

VI

Lo que debemos recordar, en fin, es que cuando las intermediaciones entre lo social y lo estatal son pobres históricamente y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico, la reclusión en lo privado, la segmentación de los mercados políticos y la acción deliberada desde el Estado para la pulverización de identidades, los miembros de una sociedad, sobre todo aquella gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración, y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada. Vivimos, decíamos en un trabajo reciente, un regreso del verticalismo en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan programas del gasto público encaminados al culto de la personalidad, como los programas de solidaridad tan recomendados por el Banco Mundial y el FMI para atacar los fo-

cos peligrosos de pobreza extrema y formación de identidades y acciones, aunque sea coyunturales, en el seno de lo popular.

En consecuencia, el TLC, el proyecto globalizador y la modernización salvaje que los acompaña, constituyen, como lo establecíamos al inicio de este trabajo, poderosos disolventes de la sociedad civil mexicana, de lo poco de modernidad que logró México durante la etapa de sustitución de importaciones. En este contexto, el discurso en torno a la “transición hacia la democracia” y al “liberalismo social” con que se hace acompañar el régimen político mexicano difícilmente encuentra sustento sociológico y tiene que conformarse con magnificar la existencia de un sistema electoral, partidista y parlamentario, prácticamente intervenido de manera policiaca por el fraude, la corrupción, el fomento deliberado de escisiones, el monopolio de los medios de comunicación, etcétera.

No son pues los movimientos y luchas sociales, los órdenes comunitarios o asociativos, y tampoco el sistema político en sus manifestaciones partidistas, parlamentarias, frentistas o sindicales, las esferas de expresión sociopolítica privilegiadas en este panorama desordenado: ellos son más bien los grandes perdedores.¹⁵ Lo paradójico es que la vía autoritaria o, digamos, este renacimiento que vemos en tantas partes de la relación líder-masas parece estarse constituyendo en la forma de integración emergente para una sociedad en desmantelamiento. Y es que, en efecto, ¿desde dónde, si no desde un Estado movilizador, sería posible articular manifestaciones que por momentos aparecen como atomización o individuación anómica, que amenazan también con explosiones espontáneas y radicales de violencia (¿la generalización del zapatismo?), que se refugian, cuando aún les es posible, en la comunidad y las identidades basistas, eclesiales..., o que tienden en ocasiones a ser atraídas por el individualismo consumista, antiautoritario y antinacional? ¿Será que el regreso sorprendente del espectro paternalista-autoritario va a revelarse como la única “solución” de continuidad y cohesión nacionales con cierta viabilidad, y que no nos queda más que optar entre el *líder bueno* que emprenda la reconstrucción de las identidades intermedias y los espacios colectivos de interacción; y el *líder malo* (neoliberal), empeñado en llevar hasta el final la derrota de la sociedad (civil), la pedacería, la atomización y la desidentidad en su obsesión por achicar el Estado, parar la inflación, reconvertir la industria, pagar la deuda y hacernos competitivos en mercados excluyentes? Qué horror haber dicho esto hace veinticinco años; pero tenemos que aceptar que hoy no suena tan desautorizado por los acontecimientos.

¹⁵ Como dice Tironi: “El aislamiento de los individuos y la segmentación de la sociedad en grupos primarios obliga a que sea el Estado el que centralice las relaciones sociales, en particular concentrando en sus manos las comunicaciones y las decisiones colectivas. En efecto, una sociedad atomizada, carente de grupos secundarios, de asociaciones intermedias o corporaciones, en los hechos delega su unidad a la institución estatal y está inerme frente a ella. En estas condiciones, el Estado es libre para manipular a la población sin que nada amenace su independencia; todavía más, tenderá a ganar mayor autonomía profundizando la atomización de la sociedad.” Eugenio Tironi, “Para una sociología de la decadencia”, en *Proposiciones*, núm. 12, Instituto SUR, 1986, Santiago de Chile.

Quién puede dudar que hubiera sido mucho mejor un tipo de sociedad civil fuerte en sus organizaciones intermedias, que facilitara el engrandecimiento de la personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad como lo quiere Habermas, o el interés colectivo de la *polis* evocado por Castoriadis, que hiciera corresponder a agregados socioeconómicos con organizaciones o partidos políticos y con ideologías o proyectos de sociedad futura, como le gustaba a Touraine evocar a la modernidad clásica; que cultivara, en resumen, unas instituciones estables tanto en lo social como en el plano de las representaciones políticas. Pero lo que ha sucedido es que no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en una sociedad civil transnacionalizada como lo quisiera *Vuelta* o el PAN (aunque fuera como resultado de la lucha conflictual de las clases), ni a una con predominancia de la sociedad política (partidos, parlamentos o grandes fuerzas corporativas), sino que la predominancia parece favorecer, en el mejor de los casos, a la lógica líder-masas o estatal-popular resultado del desorden: los mexicanos, como otros pueblos del Tercer Mundo y de América Latina, nos estamos inclinando quizá no muy conscientemente, a la búsqueda de un líder popular-nacional (Cárdenas, Camacho...). Mientras tanto, uno de cada diez habitantes juega al ciudadano, al consumidor, al elector, y Televisa quiere hacer creer al resto que para allá vamos todos con el TLC.

Si lo hasta aquí presentado fuera aceptable podríamos concluir diciendo que mientras el movimiento del 68 tuvo como entorno una sociedad en fortalecimiento, el México de la década perdida y del último decenio del siglo se caracteriza por una sociedad en debilitamiento: producto del desorden, la polarización socioeconómica y la desidentidad. En este contexto, como lo establece el zapatismo, es alentadora la presencia de las ONGs alrededor de la catedral de San Cristóbal para proteger las conversaciones entre el EZLN y Camacho Solís (fuimos 75 organizaciones entre derechos humanos, mujeres por la democracia, asistencia a las víctimas, auxilio a la niñez, lucha contra la pobreza, preservación ecológica, ciudadanos por la democracia, por los derechos a la comunicación y la información, por el derecho a la alimentación, etcétera), pero no dejamos de aparecer como barcos de papel en medio de la tormenta. Me pregunto y le pregunto al zapatismo si junto con la esperanza en la sociedad civil no tendríamos que plantearnos el problema de la permanencia del Estado fuerte, la cuestión de cómo convivir con el monstruo y que sea posible al mismo tiempo reconstruir nuestra sociedad civil hecha pedazos.

VII

Antes de concluir habrá que aclarar un asunto: si bien la referencia al desorden es central para la comprensión de México en este fin de siglo, con ello se está intentando una caracterización de la sociedad en su conjunto, en su funcionamiento "normal", y no de sus rupturas y sobresaltos que son naturales en todo orden social.

Por ejemplo: nuestros argumentos no están necesariamente en contradicción con el espíritu de un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula “La sociedad que se organiza”,¹⁶ en el que el autor se interesa por analizar el ascenso de algunas de las principales luchas sociales durante la década pasada: las organizaciones, identidades y solidaridades generadas a partir del terremoto de 1985 en la capital del país; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca; el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en la UNAM, etcétera. Es lo propio de las luchas sociales y de las situaciones extraordinarias definir un oponente, luchar en contra de él y en favor de unos objetivos que cohesionan la identidad colectiva así generada y dar la impresión, en consecuencia, de una gran organización. Es lo propio también de cualquier sociedad estar viendo surgir estas situaciones aquí y allá; pero el seguimiento de tales acontecimientos no debe llevarnos a caracterizar a la sociedad global-normal con los mismos parámetros que a las situaciones de excepción en que se desarrollan las luchas sociales. Es más, de las luchas aludidas por Monsiváis poco o nada quedó del movimiento universitario (estudiantes y académicos), a partir de 1988 cuando el CEU tuvo que optar por la acumulación de fuerzas con el cardenismo y algo no tan diferente ha acontecido con las organizaciones heredadas del terremoto, que también se vieron sobrepolitizadas y sufrieron escisiones producto de las luchas electorales en 1988 y en 1994. Aceptemos sin embargo que algunas organizaciones se alejan de este vaciamiento crónico de lo social mexicano: la COCEI que desde Cosijopi peleaba contra el vértice azteca y que hoy, a pesar de su involucramiento con el PRONASOL, no ha visto debilitada su identidad regional; los sinarquistas, que desde la Cristiada se han peleado con el Estado central, destructor obsesivo de los pequeños propietarios agrarios, a lo que el navismo no ha sido ajeno, etcétera. Así, el 85, la Asamblea de Barrios, el CEU y el propio 88 cardenista, con su extremada “visibilidad capitalina” (Camacho en el Zócalo ante las Cámaras y los medios de comunicación recibiendo los jitomatazos de Super-Barrio), generaron una apariencia de gran participación, una cortina de humo en realidad que nos ha impedido calibrar el desmantelamiento de los actores colectivos en nuestro país. Hay pues una diferencia entre la activación en el corto plazo (su enorme potencialidad para definir a un adversario y a una identidad que aparece tan poderosa en su momento de activación coyuntural), y lo que hemos llamado el comportamiento social-normal de una sociedad.

Sea como sea, tenemos que responder a otra “salvedad”, porque lo que ha caracterizado a México en el año 94 no ha sido el desorden anómico y el desmantelamiento de los actores sociales sino la aparición de una identidad colectiva bastante bien definida en el sureste del país que parece haberlo conmovido mucho más radicalmente que la lista de rupturas del orden referida anteriormente. En efecto, ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos hemos expresado: 1) sorpresa-incrédula; 2) condena a la violencia, 3) conmiseración por los pobres; y, 4) titubeo en-

¹⁶ Carlos Monsiváis, *La sociedad que se organiza*, Ediciones Era, 1987.

tre considerarlo un conflicto local o el lugar mal vigilado por el que se “coló” el malestar de esa enorme mayoría de los mexicanos convencidos de que su rol en el proyecto neoliberal nunca dejará de ser el sacrificio y la espera.

La sabia postura por parte de la opinión pública de detener la guerra, la tregua acordada por el gobierno y el resultado de la primera ronda de las pláticas para la paz, nos permitieron una primera reflexión que hoy con la “Segunda Declaración de la Selva Lacandona” tienen mucho sentido: recordábamos entonces que el patrón según el cual funcionamos los mexicanos cuando se rompe el orden nos enseña que es ridículo separar lo local de lo nacional; por más que la situación de los indios de Chiapas sea diferente de la de los mexicanos del norte, ello no anula el que una de nuestras soleras de comportamiento continúe siendo *la cargada*, que igual funciona para robustecer al *tlatoani* que para derrocar al gobierno: las clases ilustradas de San Luis Potosí, las gavillas del norte y los peones acasillados del sur se aliaron como un rayo contra el Estado central al inicio de la Revolución de 1910. Inmediatamente después del levantamiento zapatista, las organizaciones indígenas y campesinas tomaron 50 000 hectáreas sobre las que no se ha podido encontrar una solución, reconocieron al EZLN como fuerza beligerante y han dado todo su apoyo, en los últimos días, a la “Segunda Declaración de la Selva Lacandona”, retirándose de las negociaciones con los terratenientes y el gobierno estatal. Consideraron que no había voluntad para encontrar verdaderas soluciones al problema de la tierra y acusaron a la Secretaría de la Reforma Agraria de dilación en sus funciones. A lo anterior se ha agregado el ofrecimiento de los zapatistas de respaldar con las armas, en varios puntos del país, los actos de protesta ciudadana debido al fraude electoral que consideran casi inminente. A esto último, hay que decirlo, se está apostando desde muchos puntos de la geografía política del país, aceptando por lo demás que las instituciones públicas dejan enormes espacios de duda sobre la limpieza electoral. Estos serios peligros para la estabilidad nacional se dan en medio de un escenario que, desde 1988, ha sido alimentado por la imposición de los gobernantes vía el fraude en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, México... No olvidemos tampoco que en los meses recientes se pueden encontrar en el ambiente social muchas manifestaciones derivadas de esa otra solera del comportamiento de los mexicanos cuando se rompe el orden o se adivina su debilitamiento: *la revuelta plebeya*, que comienza naturalmente con la sorna, la desobediencia, el reto, y se amplifica hacia la violencia desorganizada y la destrucción pura y simple.

En nuestra sociedad no es la semejanza en la identidad de los alzados lo que los mantiene juntos, sino el compartir un mismo adversario: cuestionado éste todo pasa a ser desorden. El principio unificador de nuestra sociedad es, por extensión, estatal y no social: es que no hemos podido construir actores sociales con cierto poder, intermedios entre el Estado y los ciudadanos dispersos o las masas. Nuestras clases sociales altas, pero también las obreras y las intermedias, han sido siempre barridas por la revuelta, la guerra, los capitales exteriores, pero sobre todo por el pavor estatal y de nuestra cultura toda a convivir con el otro y a res-

petarlo. Por ello seguimos siendo caldo de cultivo para los levantamientos generalizados en contra del adversario estatal compartido (sobre todo cuando da visos de antinacionalismo). No vale argumentar que eso quedó en nuestro pasado campesino; primero, porque lo que está ante nuestros ojos proviene justamente de ese pasado; segundo, porque a diario vemos el espectáculo de otras sociedades que parecían mucho más cerca a Occidente, como Yugoslavia, y cuyo principio de orden quedó hecho trizas; pero, fundamentalmente, porque nuestra modernidad inacabada, de lo que más nos asemejaba a un país moderno que no es la posesión de un teléfono celular, una video-grabadora y una *personal computer* para cada mexicano de clase alta, sino la presencia de un empresariado medio robusto, hoy hecho jirones por la apertura comercial; de grupos de trabajadores con cierta capacidad de negociación (como los coreanos, por cierto); de un campesinado con alguna organización para influir en los ritmos de la apertura comercial, los subsidios y las leyes que lo conciernen (como el campesinado francés); de un sistema informativo y de opinión con autonomía frente al Estado; y de un sistema electoral con, por lo menos, alguna credibilidad.

En una entrevista anterior al primero de enero se le preguntaba al titular de Gobernación si lo que estaba haciendo el régimen neoliberal no era la destrucción deliberada y sistemática de todos los espacios de intermediación, incluido el balcanizado sistema partidista, y si eso no contradecía la sabia frase de don Jesús Reyes Heróles en el sentido de que “lo que resiste, apoya” (en donde se daba a entender que espacios alternativos de crítica y de oposición son apoyo indispensable de cualquier orden político sano); que si todo aquello se le cuestionaba, no hundía en una especie de fango a las bases del Estado. El secretario contestó que el desdibujamiento de las intermediaciones del pasado (sindicatos, organizaciones campesinas, universidades, sistema educativo, balcanización partidista...), estaba siendo sustituido por formas más modernas, y puso como ejemplo a las Organizaciones No Gubernamentales y a los Comités de Solidaridad. Ya no dio tiempo para replicar que eran organismos demasiado atomizados, discontinuos y pequeños en lo profundo de la organización social y que difícilmente llenarían el hueco enorme que se había generado entre ellos y el vértice...

Quizá por esto surge en Chiapas la ruptura: el régimen, acostumbrado a gobernar con base en el control extremo de los medios de comunicación y la destrucción sistemática de los espacios, actores y organismos de identidad colectiva, se distrajo en esa tarea desmanteladora: dio por sentado que las regiones del campesinado paupérrimo, predominantemente integrado por indígenas, se encargarían de su propia demolición agobiadas por el alcoholismo, los cismas religiosos, el caciquismo con sus guardias blancas y la represión militar periódica. Se olvidó que comunidades que mantienen estructuras de cohesión fuertemente ancladas en valores culturales y religiosos ancestrales —el México “profundo”— antes de aceptar su dislocación definitiva recurren a los fundamentos y los defienden de manera radical, es decir, con la vida. Así se explica, hoy, el vigoroso resurgimiento del fundamentalismo islámico.

De acuerdo con esto y dentro de la matriz de funcionamiento de la acción sociopolítica mexicana, la ruptura que estamos viviendo parece ser inminentemente nacional y no sólo local. ¿Quién iba a imaginar que el México profundo estaría, a inicios del 94, activando al México roto (los desechos de la modernización salvaje), despertando al México bronco (plebeyo), y amenazando con triturar al México ciudadano, el de los integrados a la modernización, el de los hijos triunfantes del libre comercio y el anunciado tránsito a la democracia?

VIII

Hacia el mes de mayo de 1994 las posiciones parecían claras, pero la "Segunda Declaración de la Selva Lacandona" ha venido a subrayar el acantonamiento de las partes en conflicto en esas posiciones: el gobierno resumió su postura en el punto 8 del documento "Compromisos para una paz digna en Chiapas", en donde acepta que las demandas son justas por parte del EZLN, pero que se trata de asuntos locales, circunscritos a la cuestión indígena, y propone solucionar esos "graves problemas agrarios" promulgando una "Ley General de las Comunidades Indígenas" que permita no tocar en lo absoluto las reformas hechas durante este sexenio al artículo 27 constitucional en las que se declara concluido el reparto agrario y se convierte a la figura del ejido en un bien mercantil enajenable. El EZLN, por su parte, se retiró a la selva para realizar una consulta en torno a los "Compromisos para una paz digna", y regresa ahora a la visibilidad pública con un NO rotundo a las 32 propuestas gubernamentales.

Lo que queda claro es que por ambas partes hubo, desde que terminaron las pláticas en la catedral de San Cristóbal, interés en el "compás de espera", buscando que el entorno indígena-chiapaneco y nacional se inclinara en favor de alguno de los contendientes. En efecto, el gobierno hubiera querido ver serenadas las manifestaciones eufóricas que despertó el zapatismo y su sobreexposición en los medios de comunicación nacionales e internacionales; su estrategia para lograrlo fue: 1) firmar un acuerdo con la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), decretando una fecha límite (14 de abril) después de la cual todas las invasiones de tierras se encontrarían en la extrema ilegalidad y serían sujeto de desalojo por la coerción; con ello se abrió la esperanza bastante real de que las tierras ya tomadas (30 a 50 000 hectáreas) fueran compradas para su repartición pero, naturalmente, esto se ha mantenido como una expectativa a futuro que busca detener nuevas tomas so pena de romper el trato: se ha generado de esa manera una gran tensión en el interior de estas organizaciones, entre los que ya tienen algo a que aspirar y los que no tienen nada pero se les pide que se queden quietos. De aquí que el acto de ruptura de dichos acuerdos de concertación coincida casi puntualmente con la "Segunda Declaración..." 2) Junto con esto se destinan enormes cantidades de dinero, vía PRONASOL, con vistas a apuntalar lo mejor posible la cuestionada estructura de las representaciones políticas (dar alguna legitimidad a las tan repudiadas presidencias municipa-

les, última tenaza del control desde lo alto, ante la inminencia de las elecciones estatales y nacionales). El objetivo es la reconstrucción desesperada de un sistema de dominación con base en *a*) las clases poseedoras existentes, que están recibiendo una renta del gobierno mientras sus tierras estén ocupadas, *b*) la estructura de las instituciones políticas tal como persiste hasta ahora (presidencias municipales con dinero PRONASOL), y *c*) las organizaciones productivistas, como ARIC-Unión de Uniones, que han intentado durante más de un decenio modernizar la agricultura de la región enganchándola al mercado internacional (proyecto debilitado por la caída mundial de los precios del café); son reveladoras las candidaturas a diputados federales anunciadas por el PRI en Ocosingo, la zona de mayor influencia del zapatismo: como titular Lázaro Hernández, dirigente de la ARIC-Unión de Uniones, como suplente Constantino Kanter, dirigente ganadero; 3) Mientras tanto, el Ejército Mexicano y Seguridad Nacional toman posiciones y aíslan a la región beligerante de la selva de la región civil, la de las ciudades mestizas (Ocosingo, Margaritas, Comitán, Palenque, Altamirano...): se separa así la Lacandonia al este de la zona de dominación mestiza del oeste, impidiendo el paso de ayuda humanitaria y alimentos para los 200 000 habitantes de la selva, lo que se hará aún más severo entrada la época de lluvias. En el nivel nacional la estrategia buscó, en primer lugar, concentrar la atención en la tercera reforma política, es decir, en el ámbito partidista parlamentario de la capital de la República, lo que, en segundo término, se vio redoblado, quizás involuntariamente, por el protagonismo del comisionado para la paz, Manuel Camacho, quien no se descartó como aspirante a la presidencia hasta dos días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio; después de este suceso dramático todo se concentró, naturalmente, en las "alturas", en el ámbito partidista y electoral del centro del país.

El EZLN también quisiera ver inclinarse a su favor las fuerzas que se encuentran en su entorno y lo ha logrado hasta cierto punto: primeramente creó las condiciones que han hecho posible la invasión de las 50 000 hectáreas en la zona de los Altos y las Cañadas, es decir, en territorios no controlados militarmente por el zapatismo; segundo, ha tenido la influencia suficiente para evitar que la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC, con más de doscientas organizaciones), fuera controlada por las corrientes oficiales como la CNC y la ARIC-Unión de Uniones, a pesar de que en su inicio dicha Coordinadora fue convocada e impulsada por los representantes del presidente de la República (Fábregas, Zepeda y Robledo, hoy candidato priísta a la gubernatura), para contrarrestar la presencia del Ejército Zapatista como único interlocutor en el conflicto. Parece verse pues respaldada la tesis según la cual las organizaciones oficiales campesinas fueron perdiendo sus bases en favor de las corrientes que se plantearon la vía armada o, como a otros les gusta plantearlo: los padres están en la CEOIC y los hijos en el EZLN. El hecho es que cada vez con más fuerza, las organizaciones campesinas e indígenas se declararon en favor del zapatismo, y no como simpatizantes sino exigiendo su reconocimiento como fuerza beligerante, lo que las ha deslindado hasta ahora del intento de manipulación oficialista. El

compás de espera también resulta lógico desde la perspectiva zapatista, calculando que son muy bajas las expectativas de llegar a unos acuerdos hacia la pacificación con un gobierno que está a punto de dejar de serlo y con un representante presidencial a quien el propio gobierno no quiere ver publicitado, opacando una vez más al de por sí débil candidato oficial. Así pues, la expectativa para los zapatistas es también de encierro, esperando que a partir de agosto haya un nuevo régimen con el cual pactar la paz o que los resultados de las elecciones lleven al país a una lógica de activación y de recomposición profunda que los coloque con más clara legitimidad en mejores posiciones de fuerza. En estas condiciones la "Segunda Declaración de la Selva" no sorprende a nadie, pero nos permite entender por qué los conflictos, movimientos y luchas sociales en México difícilmente se mantienen en el ámbito en el que nacen, lanzándose inmediatamente al plano de toda la nación. Y es que al no encontrar espacios o canales intermedios para hacer política (lo que supone que la mediación camachista fue sumamente débil, discontinuada y muy mal respaldada por las acciones del presidente de la República), al echar mano de la mayor cantidad de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas, se apuesta a ganar o a perder todo, lo que conduce a desquiciar el orden en un incontrolable encadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del Estado; más vale eso que entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el *tlatoani*. Entonces, en México parece operar una especie de lógica en la que un actor suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y un actor asesino (el Estado) se enfrentan convirtiendo en catástrofe casi irremediable los momentos en que se manifiesta la acción directa de la sociedad (el 68 es el ejemplo más espectacular de esto a pesar de la modernidad de sus actores); pero la guerrilla chiapaneca, más allá de la confrontación (que es la característica de toda guerra), se ha visto también empujada a lanzarse a la acumulación de fuerzas a nivel nacional, como parece evidente en la "Segunda Declaración".

IX

Ahora bien, la inercia que lleva de lo local a lo nacional no sólo está dada en el plano electoral, también lo indígena y lo agrario empujan en ese sentido. El asunto es que el conflicto ya no está limitándose a lo local-indígena en que quisiera mantenerlo el gobierno mexicano a juzgar por el punto 8 de los "Compromisos para una Paz Digna" (una "Ley General de las Comunidades Indígenas"), y ha pasado irremediablemente a plantearse como un problema *agrario-campesino* y, en esa medida, generalizable a enormes regiones del país (resultó obvio que la táctica de dilación gubernamental, de dejar morir por cansancio, no podía funcionar con una guerrilla y con las elecciones tan cerca). Con el aumento inusitado de invasiones de tierras, que parecía controlado hasta antes de la "Segunda Declaración de la Selva" pero que a partir de ahí parece

haberse pronunciado, estaríamos ante la transmutación de una guerra entre ejércitos (uno en las ciudades mestizas, otro en la Lacandonia) a una guerra entre grupos sociales: los propietarios de predios y fincas apoyados por la institucionalidad gubernamental *vs.* los invasores indígenas y campesinos de las tierras, apoyados por el zapatismo. La existencia del ejército zapatista en la selva podría comenzar a no ser lo más significativo y, para usar una imagen, sus soldados cambiarían el paliacate y el arma de alto poder por el arma corta, “trasminándose” desde la selva hacia la lucha agraria. Así, reaparecerían en toda la región, y más allá, en su calidad de campesinos invasores: de la guerra militar a la guerra civil. Para el Ejército Mexicano, sin embargo, esta transmutación sería más costosa, pues aunque al principio del conflicto sus acciones fueron de mucha violencia contra la población civil indígena, en el nuevo escenario no le resultaría fácil tomar partido por las clases poseedoras.

De no poder mantenerse el conflicto en el ámbito indígena-local con invasiones congeladas, organizaciones campesinas divididas, soluciones “pronazolizadas” y un interlocutor acorralado (el EZLN), la estrategia se complicaría. El “caso de excepción” (frente el modelo globalizador) en que el gobierno neoliberal quisiera convertir al conflicto chiapaneco, no podría mantenerse circunscrito a una parte del México profundo (los indígenas del atípico estado de Chiapas), y corre el peligro de desbordarse rápidamente no sólo sobre el resto del indigenismo del país, sino sobre el México tradicional campesino (el México maicero). Dejaría de tratarse pues de un “caso de excepción”, ya que estaríamos hablando del paso de uno a veinte millones de mexicanos.

El asunto se vuelve muy complicado, porque si todos estos mexicanos son una excepción, es decir, si no pueden con el TLC y no tienen cabida en él, entonces lo que tendría que ponerse en cuestión es el modelo mismo de la globalización. Aquí se antoja un ejercicio de reordenamiento de las dimensiones: el indigenismo que el Estado mexicano quisiera convertir en excepción (sacarlo del libre juego de las fuerzas locales y del libre comercio mediante la prometida “Ley General de las Comunidades Indígenas”), abarcaría poco menos de un millón de indígenas chiapanecos (el 1% de la población mexicana). El México profundo, con fuertes referentes culturales anclados aún de manera orgánica en la tradición indígena, contaría con unos 10 millones de habitantes. Así el México tradicional (I), suma del México profundo, más el México maicero (el de ese gran campesinado deprimido y sin competitividad), lo compondrían alrededor de 20 millones de compatriotas. En el otro extremo podríamos hablar de un México transnacional, que ha sido capaz de conectarse competitivamente con la globalización (sin incluir a los trabajadores de la maquila, de la industria transnacional y de la agricultura de exportación que distan mucho, por sus ingresos, de poder ser considerados como actores legítimos y participativos del modelo dominante). Estrictamente hablando, uno de cada diez mexicanos se encontraría enganchado de manera activa al mundo. Naturalmente que otro 20% de compatriotas constituimos los hijos —que hoy vivimos en peligro— del México moderno, el de la etapa sustitutiva de importaciones, el de la industrialización y la

urbanización en los decenios de la segunda guerra mundial a la crisis de los ochenta. Podríamos hablar así de un México integrado (III), compuesto por tres de cada diez mexicanos entre transnacionalizados y modernos: empresarios competitivos y exitosos unos, en el borde de la quiebra la mayoría; estudiantes cuyo esfuerzo formativo es inverso a su futuro laboral; obreros y empleados en pauperización y pérdida de derechos laborales, herencia del pasado; legiones de empleados con salario mínimo, capacitación mínima, organización mínima y escolaridad y cultura mínimas. Entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el México roto (II), el desarraigado, el de la modernización salvaje: los grupos sociales del modelo anterior que nunca fueron integrados por la modernidad y a los que se agregó la pedacería dejada por la “década perdida” y el *shock* neoliberal; las masas de la marginalidad urbana y del mercado informal (quizás uno de cada cuatro mexicanos), a los que hay que agregar los obreros de las maquiladoras y sus desordenadas familias (5% de los mexicanos para el año 2000); así como a los jornaleros migrantes, a los habitantes de pequeñas y no tan pequeñas ciudades, que ya no son campesinos y para los que casi no hay empleo en esas economías regionales condenadas a no ser competitivas en mercados abiertos, etcétera.

X

No cabe duda que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el México profundo como el México transnacional, y que tan iluso es querer convertir el todo hacia un extremo como hacia el otro (nada más a los miembros del equipo neoliberal se les ha ocurrido tal idea, a nadie más). “No creo que el juego del mercado de la oferta y la demanda vaya a resolver los problemas de miseria que hay, por ejemplo, en La Mixteca oaxaqueña. Ahí tiene que haber una política deliberada del gobierno”, fueron palabras pronunciadas por el candidato Colosio en el último día de su vida.

Al aceptarse una excepción en Chiapas (o en La Mixteca), que el régimen quiere que sea del 1% pero que en realidad comprende por lo menos a uno de cada dos mexicanos en el estatus de damnificados excepcionales, ya se perfila con evidencia la catástrofe de la utopía neoliberal: ¿cómo separar al México profundo del tradicional-campesino y del México roto? Parece claro que la cuestión chiapaneca nos obliga a repensar el modelo de desarrollo: tratar de ser competitivos en el mundo de la globalidad está muy bien; es más, cuanto más exitosos podamos resultar en ese esquema, mejor será (conscientes de los sacrificios que ello acarrea para los obreros de la maquila, la agromaquila y otros servicios colaterales). De ahí a abrir la frontera inocentemente a los productos agrícolas básicos (maíz, frijol, carne, leche...), a los servicios y a las manufacturas producidas a escala mundial (convirtiendo a nuestros empresarios en fayuqueros o solicitantes de franquicias), hay un paso muy grande si se toma en cuenta, además, que cada

vez que hemos resultado competitivos en algún producto, Estados Unidos ha encontrado alguna legislación doméstica que limite tal éxito (cemento, acero, cerveza, tomate, atún...). Corea, Japón, Taiwán, Malasia o Filipinas nunca abrieron sus fronteras a la importación de arroz barato de otras latitudes durante su etapa de integración trasnacional, y todavía hoy se oponen a desemplear a su nutrido campesinado. Corea y Japón cerraron sus fronteras a manufacturas de mayor competitividad durante períodos importantes que les permitieron reforzar esos renglones por la vía de la investigación científica en las universidades y en las empresas o, incluso, mandando a científicos a capacitarse en el exterior o trayendo a técnicos altamente capacitados en esas ramas.

Carne excelente traída del extranjero podría costar la mitad de la carne de calidad moderada producida en Chiapas; el café —hacia lo que se orientó durante años la producción de ese estado pensando en ser exportadores mundiales— hoy no vale la pena ni sembrarlo debido a los bajos precios internacionales y la competencia de tantos países en el mundo que producen lo mismo. No queda otra solución, como dicen tantos ecologistas, que modernizar lo tradicional, el ejido entre otras cosas, pero respetando y fortaleciendo lo social, es decir, centrando el proyecto en la gente que vive ahí, aunque eso signifique cerrar la frontera a muchos productos de mejor calidad y más baratos. Dar la apariencia de un encierro en el autoconsumo no puede ser descartado si, como dicen los ambientalistas, ello permite un desarrollo sustentable. ¿Podría ensayarse un régimen de excepción que permita la reconstrucción social de México, no sólo en el campo sino también en las ciudades?

Regresamos así al problema del *modelo nacional* de desarrollo y en esa medida a la cuestión del *control del Estado*. En esto, de nuevo, asombrosamente los zapatistas del EZLN no se equivocaron al plantear desde el principio (“Primera Declaración de la Selva”...), como una cuestión central, el asunto de las elecciones y de la democracia en el país, es decir, el problema nacional-estatal; pero ahora han quedado inscritos en una dinámica que vuelve muy difícil pensar en soluciones “técnicas” circunscritas a la región chiapaneca en donde surge este conflicto, y es enorme la inercia que nos empuja hacia los grandes problemas, hacia los temas del modelo global de desarrollo y del tipo de Estado que se quiere. Junto a la “Segunda Declaración de la Selva”..., nos llega una invitación del zapatismo para realizar una Convención Nacional antes del 21 de agosto, precedida por una Convención estatal chiapaneca. El objetivo es doble, según se puede deducir: por una parte, plantear los problemas de carácter local y buscar propuestas de solución concretas, “técnicas”, por decirlo de alguna manera, que sirvan de modelos posibles a los que el zapatismo, los indígenas y los campesinos de aquella región puedan aspirar; por otra parte, esa convención buscaría constituirse en una especie de plataforma civil del zapatismo tratando de evitar que el NO a las “Propuestas para una Paz Digna” encierre a su movimiento en lo puramente militar, confrontacionista, y lo confine en la selva lacandona. La propuesta de la Convención, sin embargo, debe ser muy cuidadosa porque corre el riesgo de congregación en el territorio zapatista a una serie de delegados

con deficiente representatividad, y se corre el peligro, también, de que las discusiones, para como están planteadas las cosas, tiendan aún más a lo electoral, a lo nacional y a la cuestión del Estado.

Es dramática la dinámica de las luchas sociales en México, y éste es un ejemplo muy claro: surgiendo de lo más enraizado del indigenismo y teniendo como uno de sus objetivos la autonomía de las etnias, entra en una dinámica que lo conduce a la acumulación de fuerzas en todo el país, a la lucha por el Estado y contra el Estado, a convertirse en un actor nacional de grandes dimensiones o ser olvidado en la selva, porque hasta antes de este NO gigantesco, ya México se estaba olvidando de Chiapas.